DIARIO OFICIAL

1976

DE LA REPUBLICA DE CHILE

Núm. 29.558—A Año XCIX — Nº 159.969 (M.R.) Santiago, Lunes 13 de Septiembre de 1976 Edición de 8 páginas Ejemplar del día \$ 3,— Atrasado 6,—

SUMARIO

JUNTA DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE

DECRETOS LEYES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Decreto ley número 1.551. — Acta Constitucional Nº 2. Bases esenciales de la institucionalidad chilena 2941

Decreto ley número 1.553. — Acta Constitucional Nº 4. Regimenes de emergencia . 2945 DECRETOS SUPREMOS

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

JUNIA DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE

DECRETOS LEYES

Ministerio de Justicia

ACTA CONSTITUCIONAL Nº 2. BASES ESENCIALES DE LA INSTITU-CIONALIDAD CHILENA

Santiago, 11 de Septiembre de 1976.— Hoy se decretó lo siguiente: Núm. 1.551.— Considerando:

1.— Que las Fuerzas Armadas y de Orden, en cumplimiento de su deber esencial de resguardar la soberanía de la Nación y los valores superiores y permanentes de la chilenidad, a justo y legítimo requerimiento de aquélia, asumieron el 11 de Septiembre de 1973 la conducción de la República con el fin de preservar la identidad histórico cultural de la Patria y de reconstruir su grandeza espiritual y material;

2.— Que para el logro de tan altos objetivos es necesario dar al paístima nueva institucionalidad que afiance su destino como Nación soberana y libre y permita que en ella la evolución y el progreso se encaucen vigorosamente, con la dinámica que la hora actual exige, dentro de un regimen de autoridad que garantice la libertad y seguridad de sus habitantes;

3.— Que para ello es indispensable establecer sus bases fundamentales, a las que deberá sujetarse el ordenamiento jurídico de la Nación;

4.— Que entre los valores esenciales en que estas bases se sustentan, coincidentes con la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno de Chile, de 11 de Marzo de 1974, cabe destacar:

a) La concepción humanista cristiana del hombre y de la sociedad que considera a aquél como un ser dotado de una dignidad espiritual y de una vocación trascendente, de las cuales se derivan para la persona derechos naturales anteriores y superiores al Estado, que imponen a éste el deber de estar a su servicio y de promover el bien común.

Dentro de esta concepción, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y es deber del Estado protegerla y propender a su fortalecimiento, como asimismo, es deber suyo reconocer a los grupos intermedios entre el hombre y el Estado, conforme al principio de subsidiariedad.

b) El concepto de unidad nacional, expresado a través de un propósito de integración armónica de todos los sectores de la Nación que persiga los grandes objetivos señalados en el considerando primero y rechaza, en consecuencia, toda concepción que fomente antagonismos sociales;

c) El concepto de Estado de Derecho, que supone un orden jurídico objetivo e impersonal, cuyas normas inspiradas en un superior sentido de justicia obligan por igual a gobernantes y gobernados;

d) La concepción de una nueva y sólida democracia que haga posible la participación de los integrantes de la comunidad en el conocimiento y solución de los grandes problemas nacionales y dotada de mecanismos que la defiendan de los enemigos de la libertad los que, al amparo de un pluralismo mal entendido, sólo pretenden su destrucción;

e) La existencia de un Estado unitario, con una administración funcional y territorialmente desconcentrada, que haga posible el desarrollo armónico, equilibrado y de participación de las regiones, y

Visto: lo dispuesto en los decretos leyes números 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974, La Junta de Gobierno en ejercicio del Poder Constituyente dicta el siguiente decreto ley con el carácter de Acta Constitucional Nº 2,

Decreto ley:

ACTA CONSTITUCIONAL Nº 2

Bases esenciales de la institucionalidad chilena

Artículo 1.— El Estado de Chile es unitario. El país se divide en regiones y su administración es funcional y territorialmente desconcentrada.

Artículo 2.— El Estado debe promover el bien común, creando las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, alcanzar su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a la seguridad, libertad y dignidad del ser humano y a su derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

El Estado propenderá a la integración armónica de todos los sectores de la Nación. En consecuencia, se rechaza toda concepción de la sociedad inspirada en el fomento de antagonismos sociales.

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado la protegerá y propenderá a su fortalecimiento.

El Estado reconoce a los grupos intermedios de la comunidad.

Artículo 3.— Las potestades estatales y las autoridades públicas someten su acción a las Actas Constitucionales, a la Constitución y a las leyes.

Artículo 4.— La soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida de acuerdo al Acta de Constitución de la Junta de Gobierno y a todas las normas que se hayan dictado o se dicten en conformidad a ella.

La soberanía no reconoce otra limitación que el respeto a los derechos que emanan de la naturaleza humana.

Articulo 5.— Chile es una república que se estructura como una nueva democracía con participación de la comunidad y dotada de mecanismos que aseguren su protección, fortalecimiento y autoridad.

Artículo 6.— Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma y con los requisitos que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y origina las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

Artículo 7.— Los preceptos de las Actas Constitucionales y de la Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de los distintos órganos de autoridad, como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.

Artículo 8.— Son Emblemas Nacionales el Escudo de Armas de la República, la Bandera Nacional y la Canción Nacional.

Artículo 9.— La mención que en esta u otras Actas Constitucionales se haga a la Constitución Política de la República debe entenderse referida a su texto vigente al 10 de Septiembre de 1973, con las modificaciones posteriores de que ha sido objeto en conformidad a lo dispuesto en el decreto ley Nº 788, de Diciembre de 1974.

Las Actas Constitucionales sólo podrán ser modificadas en ejercicio del Poder Constituyente y por medio de reformas expresas que deberán incorporarse a su texto.

Artículo 10.— Deróganse el Capítulo I y sus artículos 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política de la República.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1.— La presente Acta Constitucional entrará en vigencia el 18 de Septiembre de 1976.

Artículo 2.— Dentro del plazo de un año, contado desde la vigencia de esta Acta, los decretos leyes que hayan modificado la Constitución Política de la República en lo relativo a los Poderes del Estado y su ejercicio, deberán revestir la forma de Acta Constitucional.

Registrese en la Contraloría General de la República, publiquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.— AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.— JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.— GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.— CESAR MENDOZA DURAN, General, Director General de Carabineros.

Lo que le transcribo para su conocimiento.— Le saluda.— Mario Duvauchelle Rodríguez, Capitán de Navio, JT, Subsecretario de Justicia.

ACTA CONSTITUCIONAL Nº 3. DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES

Núm. 1.552.— Santiago, 11 de Septiembre de 1976.— Hoy se decretó lo siguiente:

Considerando:

1.— Que siendo los derechos del hombre anteriores al Estado y su vida en sociedad la razón de ser de todo ordenamiento jurídico, la pro-

tección y garantía de los derechos básicos del ser humano constituyen necesariamente el fundamento esencial de toda organización estatal;

2.— Que la tradición jurídica e histórica chilena ha sido consecuente con estos principios y ha evidenciado un propósito permanente de perfeccionamiento de los derechos de las personas y de los procedimientos que aseguren su eficaz protección;

3.— Que la amarga realidad que Chile vivió en los años previos al 11 de Septiembre de 1973 ha demostrado, sin embargo, la necesidad de fortalecer y perfeccionar los derechos reconocidos en la Carta de 1925 e in-

corporar nuevas garantías acordes con la doctrina constitucional contemporánea y su consagración internacional;

- 4.— Que entre estas últimas cabe destacar el derecho a la vida y a la integridad de las personas, la protección legal de la vida del que está por nacer, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, la legalidad del proceso, y el derecho a defensa y otras que requieren jerarquia constitucional y reafirman el valor del hombre como cédula fundamental de nuestra sociedad:
- 5.— Que, por otra parte, la ausencia de toda consideración y respeto a la vida privada de las personas y de sus familias, así como a su honra, que caracterizó al periodo político que precedió al actual Gobierno, hace necesario contemplar esta garantia constitucional sujeta a los correspondientes mecanismos de protección que esta Acta establece;
- 6.— Que siendo la libertad de opinión y de informar una de las que tiene mayor trascendencia en el mundo de hoy, se hace necesario, junto con consagrarla, estatuir las normas indispensables para evitar que su ejercicio abusivo atente contra los derechos de las personas o aquellos valores superiores que regulan la vida de la comunidad;
- 7.— Que la convicción del constituyente en orden a que, por muy eficaz que sea la protección de la persona humana, ella no resulta satisfactoria si no se procura y estimula su pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida, hace necesario contemplar, además de la libertad de enseñanza, el derecho a la educación y el deber correlativo de dispensarla que compete a la comunidad nacional toda, pero que comienza con los padres mismos, quienes no sólo tienen el derecho preferente de educar e sus hijos sino que, además, el deber de hacerlo;

8.— Que el desarrollo económico y social debe fundarse en una clara definición y adecuada protección del derecho de propiedad y su función social, ya que, además, él contribuye a hacer posible el ejercicio de las il-

bertades públicas;

9.— Que no puede tampoco el constituyente ignorar el peligro de la contaminación ambiental, el que, aunque no tratado todavía por otras Cartas Constitucionales, implica un riesgo permanente para la vida y desarrollo del hombre;

10.— Que por muy perfecta que sea una declaración de derechos, éstos resultan ilusorios si no se consagran los recursos necesarios para su protección. Uno de los más trascendentales lo constituye la creación de un nuevo recursos de protección de los derechos humanos en general, con lo cual el resguardo jurídico no queda sólo limitado al derecho a la libertad personal y al recurso de amparo, sino que se extiende a aquellos cuya naturaleza lo permita;

11.— Que para un mayor resguardo del ordenamiento jurídico que se contempla, se dispone que nadie puede invocar precepto constitucional o legal alguno para vulnerar los derechos que esta Acta reconoce, o para atentar contra la integridad o funcionamiento del Estado o del régimen constituido.

- 12.— Que como una manera de proteger los valores fundamentales en que se basa la sociedad chilena, debe declararse ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República todo acto de personas o grupos destinado a difundir doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad fundada en la lucha de clases, o que sean contrarias al régimen constituido;
- 13.— Que en el entendido que la vida en sociedad no sólo implica la existencia de derechos, sino que, además, de deberes, procede contemplar un capítulo que contenga los deberes constitucionales, como lo son entre otros, el respeto a Chile, y a sus emblemas; el de honrar a la Patria y defender su soberanía e integridad, el de contribuir a preservar la seguridad nacional, el de acatar las Actas Constitucionales, la Constitución y las leyes, que comprende el de obedecer las órdenes de las autoridades constituidas; el de concurrir a los gastos públicos; el de alimentar, educar y amparar a los hijos y de honrar y socorrer a los padres, todo sin perjuicio de los demás deberes que impongan las leyes, y

Visto lo dispuesto en los decretos leyes Nº 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974,

La Junta de Gobierno en ejercicio del Poder Constituyente dicta el siguiente decreto ley con el carácter de Acta Constitucional Nº 3.

Decreto Ley:

ACTA CONSTITUCIONAL Nº 3

De los derechos y deberes constitucionales CAPITULO I

De los derechos constitucionales y sus garantias

Artículo 1.— Los hombres nacen libres e iguales en dignidad. Esta Acta Constitucional asegura a todas las personas:

1.— El derecho a la vida y a la integridad de la persona, sin perjuicio de la procedencia de las penas establecidas por las leyes.

La ley protege la vida del que está por nacer.

Se prohibe la aplicación de todo apremio ilegitimo.

2.— La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados.

El hombre y la mujer gozarán de iguales derechos.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer discriminaciones arbitrarias. 3.— La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos.

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por si mismos.

Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción necesita fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento.

La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.

En las causas criminales, ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.

- 4.— La admisión a todos los empleos y funciones públicas, sin etros requisitos que los que impongan las Actuas Constitucionales, la Constitución y las leyes.
- 5.— La igual repartición de los impuestos y contribuciones, en proporción de los haberes o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.
- 6.— El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual y, en consecuencia, los derechos de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros.
- a) Nadie puede ser privado ni restringido en su libertad personal, sino en los casos y en la forma determinados por las Actas Constitucionales, la Constitución y las leyes.
- b) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes.
- Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta cinco días.
- c) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva.
 o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto.

Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público.

Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso, que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado, siempre que el arrestado o detenido le requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención; o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito.

duo, si al tiempo de su detención se habite del detenido o sujeto a prisión preventiva. Procederá siempre, a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como estrictamente necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido
o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.

e) En las causas criminales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio; así como tampoco a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley.

No podrá imponerse como sanción la pérdida de los derechos previsionales ni la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes.

Sin embargo, será procedente la pena de confiscación de bienes res-

pecto de las asociaciones ilícitas.

f) Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquiera instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuiclos patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia.

7.— El derecho a reunirse pacificamente sin permiso previo y sin armas. En las plazas, calles y demás lugares de uso público, las reuniones se regirán por las disposiciones generales que la ley establezca.

8.— El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquiez asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder

en términos respetuosos y convenientes.

La autoridad dará respuesta a las peticiones que se le formulen, conforme a las normas que establezca la ley.

2.— El derecho de asociarse sin permiso previo.

Las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley para gozar de personalidad jurídica.

(2943)

Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, salvo lo dispuesto en el inciso sexto del Nº 20 de este artículo.

Prohibense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado.

10.— El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y de su familia.

La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse, en los casos y formas determinados por la ley.

11.— La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, pudiendo por tanto las respectivas confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes.

12.— La libertad de emitir sus opiniones y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley. Con todo, los tribunales podrán prohibir la publicación o difusión de opiniones o informaciones que afecten la moral, el orden público, la seguridad nacional o la vida privada de las personas.

La ley establecerá un sistema de censura para la exhibición de la producción cinematográfica y su publicidad.

Asimismo, esta Acta Constitucional asegura el derecho de recibir la información en forma veraz, oportuna y objetiva sobre el acontecer nacional e internacional, sin otras limitaciones que las expresadas en el inciso primero de este número.

Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por aigún medio de comunicación social, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por ese medio de comunicación social.

Toda persona natural o juridica tendrá el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que determine la lev.

Habrá un Consejo Nacional de Radio y Televisión, autónomo, cuya composición y funcionamiento serán determinados por la ley, al que corresponderá ejercer las atribuciones que ésta le encomiende, destinadas a velar por que la radiodifusión y la televisión cumplan con las finalidades de informar y promover los objetivos de la educación que esta Acta Constitucional consagra.

La ley determinará la forma de otorgar, renovar y cancelar las concesiones de radiodifusión.

El Estado, aquellas universidades y demás personas que la ley determine podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.

No podrán ser dueños, directores o administradores de un medio de comunicación social, ni desempeñar en eilos funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones, las personas que hubieren sido condenadas a pena aflictiva o por delito que atente contra el ordenamiento institucional de la República, así calificado por la ley.

Sólo por ley podrá modificarse el régimen de propiedad y de funcionamiento de los medios de comunicación social.

La expropiación de los medios de comunicación social sólo procederá en virtud de ley especial que la autorice, previo pago de la indemnización.

13. - El derecho a la educación.

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida y, para ello, se promoverá en los educandos el sentido de responsabilidad moral, cívica y social; el amor a la Patria y a sus valores fundamentales; el respeto por la dignidad del ser humano y el espíritu de fraternidad entre los hombres y de paz entre los pueblos.

Los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos, y la facultad de escoger el establecimiento de enseñanza. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de estos derechos.

Es deber de la comunidad nacional contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. El Estado debe atender las necesidades de la educación como una de sus funciones prioritarias.

La educación básica es obligatoria. El Estado deberá mantener las escuelas gratuitas que, para este efecto, sean necesarias y asegurar el acceso a la educación media de quienes hayan egresado del nivel básico, atendiendo sólo a la capacidad de los postulantes.

Corresponderá asimismo al Estado fomentar el desarrollo de la educación superior en conformidad a los requerimientos y posibilidades del país, contribuir a su financiamiento y garantizar que el ingreso a ella se determine atendiendo únicamente a la capacidad e idoneidad de los postulantes.

La ley contemplará los mecanismos adecuados para crear, mantener y ampliar los establecimientos educacionales tanto públicos como privados y establecerá las modalidades y requisitos para la distribución de los recursos disponibles.

14.— La libertad de enseñanza. Un Estatuto especial regulará el ejercicio de esta libertad.

15.— La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que por su naturaleza son comunes a todos los hombres o deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así.

La ley, en casos calificados y cuando así lo exija el interés nacional, puede reservar al Estado determinados bienes que carecen de dueño y, también, limitar o establecer requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.

Para promover el acceso de un mayor número de personas al dominio privado, la ley propenderá a una conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar.

16.— El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes, corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social. La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas, el mejor aprovechamiento de las fuentes de energía productiva para el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes.

No obstante, nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del blen sobre que recae, o de alguno de los atributos o facultades esenciales del domialo, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social o nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectiviamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.

A falta de acuerdo en contrario, la indemnización debe ser pagada en dinero efectivo, de inmediato o en un plazo máximo de cinco años en cuotas iguales, una de las cuales se pagará de contado y el saldo en anualidades a partir del acto expropiatorio mediante la entrega de pagarés del Estado o garantizados por éste. En casos calificados en que el interés nacional lo exija, la ley podrá ampliar este plazo hasta diez años. En todo caso, el monto de la indemnización se pagará reajustado desde la fecha de la expropiación, de modo que mantenga un valor adquisitivo constante y con los intereses que fije la ley.

Para tomar posesión material del bien expropiado será previo el pago del total de la indemnización o de la parte de ella que corresponda pagar de contado, las que, a falta de acuerdo, serán determinadas provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.

Con todo, la pequeña propiedad rústica y urbana, los talleres artesanales y la pequeña empresa industrial extractiva o comercial, definidos por la ley, así como la vivienda habitada por su dueño, no pueden expropiarse sin pago previo del total de la indemnización.

Un Estatuto especial regulará todo lo concerniente a la propiedad minera y al dominio de las aguas.

17.— El derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artisticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. Este derecho comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que señale la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artisticas y a la propiedad industrial, lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior.

18.— El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar por que este derecho no sea afectado 7 tutelar la preservación de la naturaleza.

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de algunos derechos o libertades para proteger el medio ambiente.

La integridad territorial de Chile comprende la de su patrimonio ambiental.

19.- El derecho a la salud.

El Estado asume la responsabilidad de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones integradas de salud. Es deber preferente del Estado la ejecución de acciones de salud, sin perjuicio de la libre iniciativa particular en la forma y condiciones que determine la ley.

20.— La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho al trabajo. Se prohibe eualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena en los casos que ella determine.

Toda persona tiene, asimismo, derecho a la libre elección del trabajo y a una justa retribución que asegure a ella y su familia, a lo menos, un bienestar acorde con la dignidad humana.

La ley establecerá mecanismos que contemplen formas de participación del trabajador en la comunidad humana de trabajo que constituye la empresa.

Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salud públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así.

La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas.

La colegiación será obligatoria en los casos expresamente exigidos por la ley, la cual sólo podrá imponerla para el ejercicio de una profesión universitaria.

No se podrá exigir la afiliación a una organización sindical como requisito para desarrollar un determinado trabajo.

La ley establecerá los mecanismos adecuados para lograr una solución equitativa y pacífica de los conflictos del trabajo, los que deberán contemplar fórmulas de conciliación y de arbitraje obligatorios.

La decisión del conflicto, en caso de arbitraje, corresponderá a tribunales especiales de expertos, cuyas resoluciones tendrán pleno imperio, y velarán por la justicia entre las partes y el interés de la comunidad.

En ningún caso podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado o de las Municipalidades, como tampoco las personas que trabajen en empresas que atienden servicios de utilidad pública, o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional.

21 .- El derecho a la seguridad social.

Corresponde al Estado formular la política nacional de seguridad social, controlar el funcionamiento del sistema y asegurar el derecho preférente de los afiliados a efectuar su operación.

La ley establecerá un sistema de seguridad social que satisfaga de modo uniforme, solidarlo y suficiente los estados de necesidad individuales y familiares producidos por cualquier contingencia y, especialmente, por los de maternidad, vejez, muerte, accidente, enfermedad, invalidez, cargas familiares y desempleo, mediante las correspondientes prestaciones preventivas, reparadoras y recuperadoras.

22.— El derecho a sindicarse en el orden de las actividades de la producción o de los servicios, o en la respectiva industria o faena, en los casos y en la forma que señale la ley.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el sólo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en un organismo autónomo en la forma que determine la ley,

La ley contemplará mecanismos que aseguren la autonomía de las organizaciones sindicales y su propio financiamiento.

CAPITULO II

De los recursos procesales

Artículo 2.— El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legitimo ejercicio de las garantias establecidas en el artículo 1, Nºs. 1, 3, inciso cuarto, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, inciso primero, 16, 17, 19, inciso final, 20, inciso octavo; 22, inciso primero, y en la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección, podrá ocurrir por si o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

La Corte Suprema dictará un auto acordado que regule la tramitación de este recurso.

Artículo 3.— Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en esta Acta Constitucional o en las leyes, podrá ocurrir por si o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que ésta ordene que se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Esta magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por el esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.

El mismo recurso y en igual forma podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La Corte de Apelaciones respectiva dictará en tal caso las medidas indicadas en el inciso anterior que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CAPITULO III

De los deberes constitucionales

Articule 4.— Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacional :

Artículo 5.— Todo chileno tiene el deber fundamental de honrar a sa Patria, de defender su soberanía y su integridad territorial, y contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena

Artículo 6.— El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley, son obligatorios en los términos y forma que ésta determine.

Todos los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los registros militares, si no están especialmente exceptuados por la ley.

Artículo 7.— El deber de acatar las Actas Constitucionales, la Constitución y las leyes, obliga a toda persona, institución o grupo, a obedecer las órdenes que, dentro de sus atribuciones, impartan las autoridades constituidas.

Artículo 8.— Toda persona tiene el deber de contribuir a los gastos públicos en la forma y casos que la ley señale.

Artículo 9.— Toda persona tiene el deber de alimentar, educar y amparar a sus hijos conforme a la ley. Los hijos deben honrar a sus padres, socorrerlos en caso de necesidad y, mientras sean menores, respetar su legitima autoridad.

Artículo 10.— Lo dispuesto en este Capítulo es sin perjuicio de los demás deberes que impongan las leyes.

CAPITULO IV

Disposiciones generales

Artículo 11.— Nadie puede invocar precepto constitucional o legal alguno para vulnerar los derechos y libertades que esta Acta Constitucional reconoce, ni para atentar contra la integridad o el funcionamiento del Estado de Derecho o del régimen constituido.

Todo acto de personas o grupos destinado a difundir doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad fundada en la lucha de clases, o que sean contrarias al régimen constituido o a la integridad o funcionamiento del Estado de Derecho, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República.

Artículo 12.— Deróganse los artículos 10 al 20, inclusive, de la Constitución Política de la República, con excepción de los incisos segundo y tercero del Nº 2 del citado artículo 10, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 transitorios de esta Acta Constitucional.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1.— Mientras se dictan las disposiciones que den cumplimiento a lo prescrito en el inciso segundo del Nº 2 del artículo 1 de esta Acta, continuarán rigiendo los preceptos legales actualmente en vigor.

Artículo 2.— Dentro del plazo de un año, contado desde la publicación en el Diario Oficial de la presente Acta Constitucional, deberá dictarse la ley relativa a la composición y funcionamiento del organismo contemplado en el inciso sexto del Nº 12 del artículo 1, y entretanto continuarán rigiendo las disposiciones legales actualmente en vigor que regulan dicha materia.

Articulo 3.— Dentro del plazo de ciento ochenta dias, contados desde que entre en vigencia la presente Acta Constitucional, se dictará la ley orgánica de expropiaciones que se conforme a los preceptos constitucionales promulgados.

Las expropiaciones acordadas antes de entrar en vigor la presente Acta, continuarán rigiéndose, hasta su total perfeccionamiento y pago de las indemnizaciones correspondientes, por las disposiciones vigentes a la fecha de promulgación de esta Acta Constitucional.

Las expropiaciones que se acuerden o decreten durante el plazo de seis meses referidos en el inciso primero, se regirán por las leyes pertinentes en lo que no fueren contrarias a la presente Acta Constitucional. En tal caso, se considerará como valor provisional de la indemnización el que se determine conforme a esas leyes.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la ley podrá establecer normas especiales en lo relativo a la toma de posesión material, si se tratare de la expropiación de terrenos destinados a viviendas que aquélla califique como sociales.

Artículo 4.— Mientras no se dicte el Estatuto especial a que se refiere el inciso séptimo del Nº 16 del artículo 1 de esta Acta, mantendrán su vigencia las disposiciones de los incisos cuarto, quinto, sexto y décimo del artículo 10 de la Constitución Política de la República.

La gran mineria del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición decimoséptima transitoria de la Constitución Política, continuará rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de la presente Acta Constitucional.

Artículo 5.— Mientras no se dicte el Estatuto especial a que se refiere el inciso segundo del Nº 14 del artículo 1 de esta Acta, quedarán vigentes las disposiciones del artículo 10, Nº 7 de la Constitución Política de la República, en cuanto sean compatibles con las Actas Constitución nales, el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno y toda norma dictada conforme a ésta, la Declaración de Principios de aquélla, de 11 de Marzo de 1974, y el documento denominado Objetivo Nacional de Chile, de 23 de Diciembre de 1975.

Artículo 6.— No obstante lo prescrito en el inciso sexto del Nº 20 del artículo 1 de esta Acta, mantendrán su vigencia las leyes que hayan establecido la colegiación de actividades o profesiones no universitarias con anterioridad a la vigencia del presente cuerpo constitucional, mientras ellas no sean modificadas.

Artículo 7.— Mantiénese, en conformidad a la ley, la suspensión de la vigencia del artículo 9 de la Constitución Política de la República.

Artículo 8.— La presente Acta Constitucional entrará en vigencia el 18 de Septiembre de 1976.

Registrese en la Contraloría General de la República, publiquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.— AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.— JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.— GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.— CESAR MENDOZA DURAN, General, Director General de Carabineros.

Lo que le transcribo, para su conocimiento.— Le saluda.— Mario Duvauchelle Rodríguez, Capitán de Navio, JT, Subsecretario de Justicia.

ACTA CONSTITUCIONAL Nº 4 - REGIMENES DE EMERGENCIA

Santiago, 11 de Septiembre de 1976.— Hoy se decretó lo que sigue: Núm. 1.553.— Considerando:

- 1.— Que es deber natural y constitucional del Estado promover el bien común, cuya consecución sólo es posible mediante la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social de la comunidad, al que es consustancial la seguridad nacional considerada como la aptitud del Estado para garantizar ese desarrollo, precaviendo y superando las situaciones de emergencia que pongan en peligro el logro de los objetivos nacionales;
- 2.— Que esas situaciones de emergencia, constituidas esencialmente por la guerra, la conmoción interior, la subversión latente y la calamidad pública, reclaman los correspondientes estados jurídicos de excepción con facultades que permitan conjurarlas, en su amenaza o realización;
- 3.— Que el reconocimiento de que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y, en consecuencia, merecen pleno respeto en su seguridad, libertad y demás derechos inherentes a la persona humana que el Acta Constitucional Nº 3 les asegura, está ligado al deber que esa misma Acta les impone, como miembros de la comunidad, de contribuir a preservar la seguridad nacional;
- 4.→ Que, de este modo, y como lo establece la generalidad de las legislaciones, es natural que en las situaciones de anormalidad señaladas, algunos de los derechos fundamentales, que los preceptos constitucionales garantizan, se vean suspendidos en su vigencia o limitados o restringidos en su ejerciclo, en aras de los superiores intereses de la Patria;
- 5.— Que, sin embargo, tal suspensión o restricción de los referidos derechos debe guardar proporción con la gravedad de la emergencia de que se trata, para no imponerlas sino en la medida en que resulten estrictamente necesarias para la supervivencia de la soberania, la integridad territorial, el ordenamiento institucional y la normalidad de la vida nacional;
- 6.— Que el rango y jerarquía de los derechos que es preciso suspender o restringir exige rodearlos de especiales garantías en resguardo de la seguridad jurídica, debiendo señalarse las condiciones que hacen procedente en cada circunstancia su limitación;
- 7.— Que si bien existen diversas normas, tanto en la Constitución Política de la República cuanto en las leyes vigentes, tales como la Nº 6.415, de 1939; 12.927, de 1938; 16.282, de 1965, modificada por el D.F.L. Nº 1, de Interior, de 1971, entre otras, que permiten la adopción de medidas de excepción en resguardo de la Seguridad Nacional, es conveniente reunirlas, reordenarlas y sistematizarlas, para contar con un cuerpo coherente y armónico, en beneficio de la propia comunidad nacional, y

Visto: lo dispuesto en los decretos leyes números 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974,

La Junta de Gobierno en ejercicio del Poder Constituyente dicta el siguiente decreto ley con el carácter de Acta Constitucional Nº 4. Decreto lev:

ACTA CONSTITUCIONAL NO

Regimenes de emergencia

Artículo 1.— Los derechos y garantías que el Acta Constitucional Nº 3 asegura a todas las personas, sólo pueden ser afectados en los casos de emergencia que contemplan los artículos siguientes.

Artículo 2.— Son casos de emergencia, la situación de guerra externa o interna, la conmoción interior, la subversión latente y la calamidad pública.

Artículo 3.— En situación de guerra externa podrá declararse el estado de asamblea; en caso de guerra interna o de conmoción interior, el estado de sitio; en el de subversión latente, el estado de defensa contra la subversión, y en el evento de calamidad pública, el estado de catástrofe.

La declaración de los estados de emergencia a que se refiere el inciso anterior, procederá respecto de todo o parte del territorio nacional, y deberá ser decretada por el Presidente de la República, con acuerdo de la Junta de Gobierno, salvo en lo que se refiere a los estados de asamblea y de catástrofe, para los que no se requerirá dicho acuerdo.

La duración de los mencionados estados, exceptuado el de asamblea, no podrá exceder de seis meses, sin perjuicio de su prórroga sucesiva por periodos no superiores a dicho lapso, si a la expiración del plazo por el cual fueron decretados, se mantuvieren las condiciones que lo hagan procedente.

La facultad de prorrogar los estados de emergencia en conformidadal inciso precedente, como asimismo la de ponerles término, en cualquiertiempo, corresponderá al Presidente de la República, con acuerdo de la Junta de Gobierno, salvo en lo que se refiere a los estados de asambiea y de catástrofe, para los que no se requerirá dicho acuerdo.

Artículo 4.— Por la declaración de estado de asamblea, el Presidente de la República queda facultado para privar a un chileno de su nacionalidad en conformidad al número 4 del artículo 6 de la Constitución Política de la República y para suspender o restringir todos o algunos de los derechos y garantias establecidos en el Acta Constitucional Nº 3 y que resulten estrictamente necesarios para conjurar, en su amenaza o realización, la emergencia que la orgina, salvo los derechos contemplados en los números 1 y 10, inciso primero, del artículo 1 de esa misma Acta.

Artículo 5.— Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá privar a un chileno de su nacionalidad, de acuerdo con el Nº 4 del artículo 6 de la Constitución Política de la República; suspender o restringir la libertad personal y el derecho de reunión.

Si lo estimare imperioso para la conservación de la paz interior, podrá suspender o restringir la libertad de opinión y la de informar y restringir el derecho de asociación,

Si existieren o se organizaren fuerzas rebeldes que pusieren en peligro la conservación del régimen Institucional, podrá, además, restringir la libertad de trabajo, imponer censura a la correspondencia y a las comunicaciones y disponer requisiciones de bienes u otras limitaciones al derecho de propiedad, con el fin de prevenir o asegurar el éxito de las acciones u operaciones que deban realizarse para actuar en contra de dichas fueras rebeldes.

Artículo 6.— Por la declaración de estado de defensa contra la subversión, el Presidente de la República sólo podrá restringir la libertad personal, la de informar y el derecho de reunión. Si lo estimare indispensable para impedir la materialización de la subversión, podrá también suspender la libertad personal y el derecho de reunión; restringir la libertad de opinión y el derecho de asociación.

Con todo, durante la vigencia del estado de excepción a que se refiere este artículo, la persona que se viere afectada por una medida de arresto o traslación a un lugar del país por un término que sobrepasare los seis meses, continuo o discontinuo, tendrá derecho a optar por el abandono del territorio nacional, salvo que, por razones de especial gravedad, así calificadas por el Presidente de la República, con acuerdo de la Junta de Gobierno, el ejercicio de dicha opción por parte de aquélla, resulte peligroso para la seguridad nacional.

El derecho de opción a que se refiere el inciso precedente, será sin perjuicio de las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia, que pudieren obstar a su ejercicio.

Artículo 7.— Por la declaración de estado de catástrofe, el Presidente de la República podra restringir la circulación de personas y el transporte de mercaderias.

Podrá, asimismo, disponer requisiciones de blenes y establecer limitaciones al derecho de propiedad, con el fin de proveer de elementos indispensables para la satisfacción de las necesidades de la población.

Si estimare que la gravedad de la catástrofe lo requiere podrá, además, restringir las libertades de trabajo, de opinión y de informar.

Artículo 8.— Las medidas que se adopten durante los estados de excepción referidos en el artículo 3, no podrán tener más duración que la que corresponda a la vigencia de dichos estados, salvo lo dispuesto en el número 4 del artículo 6 de la Constitución Política de la República.

Los arrestos que se dispusieren en virtud de los artículos 4, 5 y 6 de esta Acta Constitucional, sólo podrán practicarse en la residencia del afectado o en lugares que no sean cárceles ni otros destinados a la detención o prisión de reos comunes.

La medida de traslado de una persona a un lugar determinado del país, que se dispusiere en virtud de los artículos 4, 5 y 6 de esta Acta Constitucional, deberá cumplirse en localidades urbanas.

Artículo 9.— Las requisiciones que sea necesario practicar de acuerdo con los artículos 4, 5 y 7, darán lugar a indemnización en conformidad a la ley.

Igual norma se aplicará a las limitaciones o restricciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación del dominio o de alguno de sus atributos o facultades esenciales.

Artícule 10.— El Presidente de la República, con acuerdo de la Junta de Gobierno, cuando corresponda, podrá hacer extensiva la suspensión o restricción de las garantías constitucionales referidas en los artículos anteriores, a regiones o zonas no comprendidas en los respectivos estados de asamblea, sitio, defensa contra la subversión o catástrofe.

Artículo 11.— La ley que complemente la presente Acta Constitucional podrá contemplar diferentes grados en los estados de sitio, de defensa contra la subversión y de catástrofe, y determinará las garantías señaladas en los artículos 5, 6 y 7 que podrán suspenderse o restringirse en cada uno de aquéllos.

Artículo 12.— El Presidente de la República podrá ejercer las facultades que le confieren los artículos 4, 5, 6 y 7 de esta Acta Constitucional, ya sea por si o por medio de las autoridades que señale la ley a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 13.— Durante los regimenes de emergencia y tratándose de hechos que afecten a la seguridad del Estado, el plazo de cuarenta y ocho horas a que se refiere el inciso segundo de la letra b) del Nº 6 del artículo 1 del Acta Constitucional Nº 3, será hasta de diez días.

Artículo 14.— Los recursos de protección y de amparo establecidos en los artículos 2 y 3 del Acta Constitucional Nº 3, sólo serán procedentes en la medida que sean integralmente compatibles con las disposiciones legales que rijan las referidas situaciones de emergencia.

Artículo 15.— Deróganse los números 12, del artículo 44, y 17 del artículo 72, de la Constitución Política de la República, y el Nº 14 del artículo 10 del decreto ley Nº 527, de 1974.

La referencia que el Nº 4 del artículo 6 de la Constitución hace al artículo 72, Nº 17, del mismo cuerpo, debe entenderse hecha a los artículos 4 y 5 de la presente Acta.

Artículo transitorio.— La presente Acta Constitucional comenzará a regir ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial, con excepción de lo prescrito en el artículo 13, que entrará en vigencia desde la fecha de dicha publicación y de lo dispuesto en el artículo 14, que empezará a regir conjuntamente con el Acta Constitucional Nº 3, el 18 de Septiembre de 1976.

Dentro del plazo de ciento ochenta dias referido en el inciso anterior, deberá dictarse la ley complementaria de la presente Acta Constitucional.

Registrese en la Contraloria General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloria.— AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.— JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.— GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.— CESAR MENDOZA DURAN, General, Director General de Carabineros.

Lo que le transcribo para su conocimiento.— Lo saluda.— Mario Duvauchelle Rodríguez, Capitán de Navio, JT, Subsecretario de Justicia.

DECRETOS SUPREMOS

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

MODIFICA PROGRAMA DEL SISTEMA UNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES PARA EL EJERCICIO DEL ANO 1976

Santiago, 13 de Julio de 1976.— Hoy se decretó lo que sigue: Núm. 351.— Vistos, lo dispuesto en el artículo 23º, del decreto ley Nº 307, de 1974, y lo informado por la Superintendencia de Seguridad Social,

Decreto:

1.— Apruébanse las siguientes modificaciones al Programa del Sistema Unico de Prestaciones Familiares para el ejercicio del año 1976, aprobado por decreto supremo Nº 651, de 1975, y modificado por el decreto supremo Nº 195, de 1976, ambos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaria de Previsión Social.

2.— El monto de la asignación familiar se eleva, a partir del 1º de Junio de este año, a \$ 62.94 mensuales, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley Nº 670, de 1974, y sus modificaciones contenidas en el decreto ley Nº 1.275, de 1975.

3.— Auméntase el aporte al Servicio Nacional de Salud para el programa de dación de leche en \$ 112.648.000.

4.— Auméntase el aporte a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en \$ 69.883.000.

5.— Auméntase el aporte a la Junta Nacional de Jardines Infantiles en \$ 12.413.900. 6.— Los recursos para gastos administrativos contemplados en el 11º 8, del decreto supremo Nº 651, citado, y su modificación contenida en el Nº 3, del decreto supremo Nº 195, se suplementan en las siguientes cantidades para las instituciones que se indican:

cantidades para las instituciones que se indican;	
- Caja de Previsión de Empleados Particulares	\$ 12.137.750,59
- Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacio- nal;	The Late of the la
Sección Empleados y Oficiales	650.026,37
mos	408.783,34
Caja Bancaria de Pensiones Caja de Previsión y Estimulo de los Empleados	95.821,90
del Banco de Chile	23.608,15
Banco del Estado de Chile	89.382,35
cos de los Hipódromos Centrales	41,291,25
- Servicio de Seguro Social	7.028.485,81
- Caja de Compensación Metalúrgica - Caja de Compensación de Asignación Familiar	3.018.199,00
Obrera de la Cámara Chilena de la Construcción — Caja de Compensación de Asignación Familiar	2.582.580,00
Obrera de las Industrias del Cuero y del Calzado — Caja de Compensación de Asignación Familiar Obrera de la Asociación de Industriales de Valpa-	491.400,00
ralso y Aconcagua	712.253,01
llanes	40.540,50
Caja de Compensación de Asignación Familiar de la Cámara de Comercio	884.010,00

(2947)

	The state of the s	
- Caja de Compensación Fabril \$ 720.720,00 - Contraloria General de la República \$57.835,34	Chile: Dirección General de Aeronautica de Chile	5.064.007,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 29.280,687,61	- Fuerza Aérea de Chile, Dirección General del Per- sonal: Servicio de Bienestar Social	18.149,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION , 25.250,001,01	- Ministerio de Defensa Nacional: Corporación de Construcciones Deportivas	15.105,69
7.— Suplementase el Presupuesto del Fondo Unico de Prestaciones	Ejército de Chile: Comando de Fabricaciones Mi- litares: Instituto Geográfico Militar	78.457,14
Familiares para el año 1976, establecido en el Nº 9 del decreto supremo Nº 651, de 1975, y modificado en el Nº 4, del decreto Nº 195, de 1976,	- Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados (SEAM)	1.541.014,09
en la siguiente forma;	de Telecomunicaciones	587.964,14
I. INGRESOS	- Superintendencia de Compañías de Seguros, Se- ciedades Anonimas y Bolsas de Comercio	259.879,50
1.—Por mayores recursos financieros se aumentan:	- Empresa de Comercio Agricola	3.026.138,45 2.977.564,50
25% sobre remuneración imponible \$ 1.079.939.576,76	- Corporación de la Vivienda	14.028.999,49
TOTAL MAYORES RECURSOS 1.079.939.576,78	- Corporación de Servicios Habitacionales	2.388.510,00 342.103,58
TOTAL MATCHES INCOME.	Corporación de la Reforma Agraria	5.113.179,66 2.133.491,37
II. EGRESOS	- Linea Aérea Nacional	1.155.781,47
2.—Por mayores gastos se suplementan;	Corporación de Mejoramiento Urbano Junta de Servicios Judiciales	1.731.637,99 52,460,58
2.—Por mayores gastos se suprementant	- Instituto Nacional de Hidráulica	85.311,09
- Pago de asignaciones		975.541,03 76.925.936,98
Aporte al Servicio Nacional de Salud 112.648.000.00	_ Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	1.742.336,33
Aporte a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 69.883.000,00	- Dirección General del Crédito Prendario y de	1.186.656,14
Becas	- Universidad Técnica del Estado	19.230.580,12
Provisión para aporte al Fondo Común de Cesantía,	- Instituto Nacional de Estadísticas	1.323.104,96 68.779.111,63
establecido en los artículos 16º y 17º del D.L. Nº 603	- Instituto de Desarrollo Agropecuario	2.908.257,19
Reserva presupuestaria 312.337.221,24		6.673.139,12 1.004.193,97
TOTAL MAYORES EGRESOS \$ 1.079.939.576,76	Comisión Nacional de Investigación Científica	
Transferant la significate institución el Anevo del Presumuesta	y Tecnológica — CONICYT	316.075,24 3.491.386,50
8.— Incorpórese la siguiente institución al Anexo del Presupuesto del Fondo Unico de Prestaciones Familiares, bajo el título "Aportes al	- Fondo de Educación y Extensión Sindical	41.575,27
Fondo":	— Comisión Chilena de Energía Nuclear	896,898,89 116.315,73
- Comisión Chilena del Cobre	- Empresa de Ferrocarriles del Estado	2.208.943,8
9.— Reemplazase el Anexo de Presupuestos del Fondo Unico de Pres-	— Instituto de Investigaciones Agropecuarias — Contraloría General de la República	409.931.8 5.639.165.5
aciones Familiares aprobado por el decreto supremo Nº 651, citado, y nodificado por el decreto supremo Nº 195, por el siguiente:	- Superintendencia de Seguridad Social	469.661,8
	— Servicio Médico Nacional de Empleados	6.740.260,1 92.295,6
ANEXO	— Servicio Nacional de Turismo	337.169,3
APORTES AL FONDO	— Instituto Antártico Chileno	100.068,2
- Caja de Previsión de Empleados Particulares \$ 838.797.956,07	Servicios Habitacionales	868.101,4
- Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional: Sección Empleados y Oficiales 31.559.927,3	Junta de Desarrollo Industrial de Bio-Bio, Malleco	14.440.5
- Caja Bancaria de Pensiones 43.401.456,12	- Corporación de Televisión Universidad de Chile	429.712.3
- Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco Chile	— Departamento de Indemnización a Obreros, Moline- ros y Panificadores	141.319,7
- Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del	- Superintendencia de la Industria Textil	125.955,8 75.764,2
Banco del Estado de Chile		3.290,8
- Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional:	- Comisión Chilena del Cobre	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sección Tripulantes de Naves y Operarios Maríti-	Antillanas w Manetrongos de la Armada	
mos me me me	Astilleros y Maestranzas de la Armada Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición	3.714.952.0 42.871.1
- Caja de Compensación Metalúrgica 26.890.859,17	— Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición — Empresa Nacional de Minería	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2
- Caja de Compensación Metalúrgica 26.890.859,17	- Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2
- Caja de Compensación Metalúrgica	— Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición — Empresa Nacional de Minería	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2
- Caja de Compensación Metalúrgica	— Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición — Empresa Nacional de Minería	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2 349.985,9
Caja de Compensación Metalúrgica	— Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición — Empresa Nacional de Minería	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2 349.985,9 211.086.466,5 26.821.688,2
Caja de Compensación Metalúrgica	— Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición — Empresa Nacional de Minería	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2 349.985,9 211.086.466,5 26.821.688,2
Caja de Compensación Metalúrgica	— Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición — Empresa Nacional de Minería	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2 349.985,9 211.086.466,5: 26.821.688,2: 40.012.024,0
Caja de Compensación Metalúrgica	— Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición — Empresa Nacional de Minería	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2 349.985,9 211.086.466,5 26.821.688,2 40.012.024,0 524.657,4
Caja de Compensación Metalúrgica	— Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición — Empresa Nacional de Minería	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2 349.985,9 211.086.466,5 26.821.688,2 40.012.024,0 524.657,4
Caja de Compensación Metalúrgica	— Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición — Empresa Nacional de Minería	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2 349.985,9 211.086.466,5 26.821.688,2 40.012.024,0 524.657,4 667.354,3
Caja de Compensación Metalúrgica	- Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición - Empresa Nacional de Minería - Instituto de Desarrollo Indígena - APORTES DEL FONDO - Servicio de Seguro Social - Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas - Caja de Previsión de la Defensa Nacional - Caja de Previsión Social de los Profesionales Hipicos de los Hipódromos Centrales - Caja de Previsión de los Empleados y Obreros de la Empresa de Agua Potable de Santiago - Almacenes Reguladores de la Dirección de Industria y Comercio - Departamento de Previsión de los Carabineros de Chile	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2 349.985,9 211.086.466,5 26.821.688,2 40.012.024,0 524.657,4 667.354,3
Caja de Compensación Metalúrgica	- Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición - Empresa Nacional de Minería - Instituto de Desarrollo Indígena - Instituto de Desarrollo Indígena - Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas - Caja de Previsión de la Defensa Nacional - Caja de Previsión Social de los Profesionales Hipicos de los Hipódromos Centrales - Caja de Previsión de los Empleados y Obreros de la Empresa de Agua Potable de Santiago - Almacenes Reguladores de la Dirección de Industria y Comercio - Departamento de Previsión de los Carabineros de Chile - Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarri-	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2 349.985,9 211.086.466,5 26.821.688,2 40.012.024,0 524.657,4 667.354,3 7.279.5
Caja de Compensación Metalúrgica	- Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición - Empresa Nacional de Minería - Instituto de Desarrollo Indígena - Instituto de Desarrollo Indígena - Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas - Caja de Previsión de la Defensa Nacional - Caja de Previsión Social de los Profesionales Hipicos de los Hipódromos Centrales - Caja de Previsión de los Empleados y Obreros de la Empresa de Agua Potable de Santiago - Almacenes Reguladores de la Dirección de Industria y Comercio - Departamento de Previsión de los Carabineros de Chile - Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado - Caja de Previsión Social de los Obreros Municipa-	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2 349.985,9 211.086.466,5 26.821.688,2 40.012.024,0 524.657,4 667.354,3 7.279.5
Caja de Compensación Metalúrgica	— Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición — Empresa Nacional de Minería — Instituto de Desarrollo Indígena — APORTES DEL FONDO — Servicio de Seguro Social — Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas — Caja de Previsión de la Defensa Nacional — Caja de Previsión Social de los Profesionales Hipicos de los Hipódromos Centrales — Caja de Previsión de los Empleados y Obreros de la Empresa de Agua Potable de Santiago — Almacenes Reguladores de la Dirección de Industria y Comercio — Departamento de Previsión de los Carabineros de Chile — Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado — Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República — Previsión Manya Casta an Asignesiones	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2 349.985,9 211.086.466,5 26.821.688,2 40.012.024,0 524.657,4 667.354,3 7.279.5 33.451.771,7 2.661.445.3
Caja de Compensación Metalúrgica	— Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición — Empresa Nacional de Minería — Instituto de Desarrollo Indígena — APORTES DEL FONDO — Servicio de Seguro Social — Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas — Caja de Previsión de la Defensa Nacional — Caja de Previsión Social de los Profesionales Hipicos de los Hipódromos Centrales — Caja de Previsión de los Empleados y Obreros de la Empresa de Agua Potable de Santiago — Almacenes Reguladores de la Dirección de Industria y Comercio — Departamento de Previsión de los Carabineros de Chile — Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado — Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República — Previsión Manya Casta an Asignesiones	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2 349.985,9 211.086.466,5 26.821.688,2 40.012.024,0 524.657,4 667.354,3 7.279.5 33.451.771.7 2.661.445.3
Caja de Compensación Metalúrgica	— Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición — Empresa Nacional de Minería — Instituto de Desarrollo Indígena — APORTES DEL FONDO — Servicio de Seguro Social — Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas — Caja de Previsión de la Defensa Nacional — Caja de Previsión Social de los Profesionales Hipicos de los Hipódromos Centrales — Caja de Previsión de los Empleados y Obreros de la Empresa de Agua Potable de Santiago — Almacenes Reguladores de la Dirección de Industria y Comercio — Departamento de Previsión de los Carabineros de Chile — Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarri- les del Estado — Caja de Previsión Social de los Obreros Municipa- les de la República — Provisión Mayor Gasto en Asignaciones Tómese razón, registrese, comuníquese y publiquese.—	
Caja de Compensación Metalúrgica	— Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición — Empresa Nacional de Minería — Instituto de Desarrollo Indígena — APORTES DEL FONDO — Servicio de Seguro Social — Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas — Caja de Previsión de la Defensa Nacional — Caja de Previsión Social de los Profesionales Hipicos de los Hipódromos Centrales — Caja de Previsión de los Empleados y Obreros de la Empresa de Agua Potable de Santiago — Almacenes Reguladores de la Dirección de Industria y Comercio — Departamento de Previsión de los Carabineros de Chile — Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado — Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República — Provisión Mayor Gasto en Asignaciones Tómese razón, registrese, comuníquese y publiquese—PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2 349.985,9 211.086.466,5; 26.821.688,2; 40.012.024,0; 524.657,4; 667.354,3; 7.279.5; 33.451.771,7; 2.061.445.3; 10.006.776,9; 40.000.000,0; A U G U S T C la República.—
Caja de Compensación Metalúrgica	— Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición — Empresa Nacional de Minería — Instituto de Desarrollo Indígena APORTES DEL FONDO — Servicio de Seguro Social — Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas — Caja de Previsión de la Defensa Nacional — Caja de Previsión Social de los Profesionales Hipicos de los Hipódromos Centrales — Caja de Previsión de los Empleados y Obreros de la Empresa de Agua Potable de Santiago — Almacenes Reguladores de la Dirección de Industria y Comercio — Departamento de Previsión de los Carabineros de Chile — Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarri- les del Estado — Caja de Previsión Social de los Obreros Municipa- les de la República — Provisión Mayor Gasto en Asignaciones Tómese razón, registrese, comuníquese y publiquese.— PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de Sergio Fernández Fernández. Ministro del Trabajo y Pre Jorge Cauas Lama, Ministro de Hacienda.	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2 349.985,9 211.086.466,5; 26.821.688,2; 40.012.024,0; 524.657,4; 667.354,3; 7.279.5; 33.451.771,7; 2.061.445.3; 10.006.776,9; 40.000.000,0; A U G U S T C la República.—
Caja de Compensación de Asignación Familiar Obrera de la Asociación de Industriales de Valparaiso y Aconcagua	— Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición — Empresa Nacional de Minería — Instituto de Desarrollo Indígena APORTES DEL FONDO — Servicio de Seguro Social — Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas — Caja de Previsión de la Defensa Nacional — Caja de Previsión Social de los Profesionales Hipicos de los Hipódromos Centrales — Caja de Previsión de los Empleados y Obreros de la Empresa de Agua Potable de Santiago — Almacenes Reguladores de la Dirección de Industria y Comercio — Departamento de Previsión de los Carabineros de Chile — Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarri- les del Estado — Caja de Previsión Social de los Obreros Municipa- les de la República — Provisión Mayor Gasto en Asignaciones Tómese razón, registrese, comuníquese y publiquese.— PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de Sergio Fernández Fernández. Ministro del Trabajo y Pre Jorge Cauas Lama, Ministro de Hacienda.	3.714.952.0 42.871.1 230.212.2 349.985,9 211.086.466,5: 26.821.688,2: 40.012.024,0: 524.657,4: 667.354,3: 7.279.5: 33.451.771.73 2.061.445.3: 10.006.776,92: 40.000.000,0: - A U G U S T C la República.— evisión Social.—

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Resumen de los Estados de Situación al 26 de Julio de 1976, presentados por las Financieras del País.

CUADRO DEL ACTIVO

(Sin cláusula y con cláusula de reajuste)

N° de Or- den Financieras	FONDOS % DISPONI- en el BLES total		% en el total	The state of the s	en el total	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	OTRAS CUENTAS DEL DEBE		en el total
F. 1 Colocadora Nacional de Valores SAF	6.236.433,07 9,4 5.239.793,87 7,9 1.059.496,27 1,6 489.828,59 0,7	26.550.750.43 18.055.885,59	25.0 3.8 2.6 4.2	9.930.433,32 2.088.417,95 1.373,318,37 639.518,08	36.2 7.6 5.0 2.3	4.476.036.10 320.824.92 1.481.919.45 1.788.124.62	94,672,386,33 49,950,695,64 8,905,359,60 9,545,349,93	287.203.276.90 84.150.482.81 30.855.979,28 41.171.011,13	7.2
Valores S. A	1.902.865,00 2,9	9.353.607,00	1,3	374.767,00	1.4	108.323,00	3.567.376,00	15.306.938,00	1,3
F. 10 Adelantos y Créditos	32.908.122,12 49,4	217.386.066,83	31,6	6.751.160.36	24.6	9.240.187,21	123.561.986.76	389.847.523,28	33.1
S. A	45.216,73 0,1	5.743,323,56	0,8	140.478,99	0.5	93.437.79	6.853.769,84	12.876.226,91	1,1
Nacional SAF F. 13 Comercial S. A	795.647,11 1,2 2.740.860,69 4,1	24.827.648.91 17.352.706,68	3,6 2,5	858.381.50 91.285,41	3.1	802.046.55 1.355.139,06	8.642.717,08 9.553.768,57	35.926.441,15 31.093.760,41	
nanciera S. A	892.250,83 1,3	17.117.849,75	2,5	243.719,33	0,9	631.674,26	5.618.531,40	24.504.025,57	2,1
Atlas S. A	1.036.843.69 1.6 4.769.401.86 7.2		1,1 5,0	1.151.617.16 1.191.154.88	4.2	565.038.11 272.594.85	3.742.702,97 12.227.325,30	13.952.570.07 52.722.826.00	
Desarrollo S. A	1.342.714,08 2,0 1.276.648,30 1,9 2.203.123,10 3,3	8.878.521,42	1,4 1,3 3,1	173.129.84 720.458.72 123.072.49	0.6 2.6 0.5	207.814.38 474.060.09 99.112,86	2.689,918,47 13.153,794,79 4.678,475,65	13.839.062.95 28.668.524,75 24.503.483,32	
F. 21 Financiera Corfinsa S. A	701.364,03 1,1	15.095.948,84	2,2	70.747.98	0.3	2.935.558,68	1.810.167,26	20.613.786,79	1,8
F. 22 Financiera Ultramar S. A	409.068.13 0.6	23.490.741.60	3,4	348.275,39	1.3	363.823.51	2.806.666,99	27.418.575,62	2,3
Comercial S. A	336.306,13 0,5	4.759.752,08	0,7	303.564,35	1,1	109.457.17	119.838,99	5.628.918,72	0,5
F. 26 Financiera Mediterráneo	1.148.934,84 1,7	12.194.228,62	1,8	354.526,38	1,3	603.242,75	1.650.452,85	15.951.385,44	1,4
F. 27 Financiera Porvenir S. A. F. 29 Financiera Melón S. A.	1.003.334.90 1.5 11.339,47 0.0	10.300.181,17 4.149.285,12	1.5 0,6	203.974.88 293.699,26	0.8	863.001,58 415.620,04	2.303.841,68 137.855,85	14.674.334,21 5.007.799,74	1,2 0,4
TOTAL	66.549.592,81 100,0	688.561.619,67	100,0	27.425.701,64	100.0	27.187.036,98	366.192.981,95	1.175.916.933,05	100.0

CUADRO DEL PASIVO

(Sin cláusula y con cláusula de reajuste)

Or- den Financieras	le	en el otal	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO	OTRAS CUENTAS DEL HABER	CAPITAL Y RESERVAS	en el total	TOTAL	en e total
Colocadora Nacional de Valores SAF	158.459.158.86 29.593.561,35 17.446.324,98 21.290.046,74	26,5 4,9 2,9 3,6	1.551.823,88 39.700,00 1.344.272,23 5.068.569,05	109.578.700,75 47.497.187,06 9.769.270,07 11.831.952,03	17.613.593,41 7.020.034,40 2.296.112,00 2.980.443,31	16,4 6,5 2,1 2,8	287.203.276,90 84.150.482,81 30.855.979,28 41.171.011,13	24. 7. 2. 3.
Valores S. A	9,094.647,00	1,5	164.394,00	4.547.897,00	1,500.000,00	1,4	15.306.938,00	1,
S. A	197,302,359,34	33,0	25.060.632,50	138.839.445,25	28,645.086,19	26,7	389.847.523,28	33
S. A	16.649,39	0,0	120.844,00	8.838.732,48	3.900.001,04	3,6	12.876.226,91	1
llo Nacional SAF	18.459.885,06 15.253,839,80	3,1 2,6	2.280.924.37 96.126,83	12.421.036.98 13.327.679,48	2.764.594,74 2.416.114,30	2,6	35.926.441,15 31.093.760,41	3 2
nanciera S. A	15.345.251,16	2,6	9.850,00	7,658.924,41	1.490.000,00	1,4	24.504.025,57	2
Atlas S. A	7.790.595,35 30.114.671,86	1.3 5,0	77.850,08 1.594.702,00	4.231.156,14 17.099.940,90	1.852.968.50 3.913.511,24	3,7	13.952,570,07 52.722.826,00	1 4
Desarrollo S. A	8.549.052,92 9.890.234,24 17.389.689,96	1,4 1,7 2,9	34.928.95 1.273.313.63 1.802.151,99	3.845.081,08 11.010.202,82 7.076.682,80	1.410.000,00 2,329.732,63 2.400.000,00	1,3 2,2 2,2	13.839.062,95 24.503.483,32 28.668.524,75	1 2 2
S. A	8.869.417,25	1,5	2.736.548,24	4.332.821,30	4,675,000,00	4.4	20.613.786,79	1
S. A	10,255.402,50	1,7	1918	7.763.173,12	9.400.000,00	8,8	27.418.575,62	2
Comercial S. A	3,441.185,59	0,6	105 Community	581.681,13	1.606.052,00	1,5	5.628.918,72	(
18. A	9.014.550,35	1,5	596.381,70	3.140.453,39	3.200.000,00	3,0	15.951.385,44	1
27 Financiera Porvenir S. A	9,625.509,41 814.114,39	1.8	==	2.548.824,80 893.685,35	2.500.000,00 3,300.000,00	2.3 3,1	14.674.334,21 5.007.799,74	
TOTAL	598.016.147.50	100.0	43.853.013,45	426.834.528,34	107.213.243.76	100,0	1,175,916,933,05	100